



SÍNDIC DE GREUGES DE LA COMUNITAT VALENCIANA REGISTRE GENERAL
27/04/2016
EIXIDA NÚM. 08780

Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas
Hble. Sra. Consellera
C/ Castán Tobeñas, 77 - CA90 - Torre 3
Valencia - 46018 (Valencia)

=====
Ref. queja núm. 1512946
=====

Asunto. Dependencia. Demora en Resolución.

Hble. Sra. Consellera:

Acuso recibo de su escrito en relación con la queja de referencia, iniciada a instancia de D. (...), el pasado 02/10/2015, sobre el asunto mencionado.

De dicho escrito, de la documentación aportada por la persona interesada y de todo lo actuado, se deduce que su madre, **Dña. (...)**, con **DNI (...)**, solicitó el 28 de abril de 2010 el reconocimiento de su situación de dependencia, dictándose el 25 de noviembre de 2010 resolución en la que se le reconocía una situación de dependencia en Grado 1 nivel 2. En fecha 25/11/2013 solicitó revisión de dicho grado confirmándose el mismo en fecha 24/02/2015, por tanto hasta el 1 de julio de 2015 no le correspondía prestación o recurso alguno según el calendario vigente de la aplicación de la ley de la dependencia.

Tras el agravamiento en su salud, solicitó con fecha 08/05/2015 revisión de su grado de dependencia y transcurridos 11 meses no ha recibido respuesta alguna. Esta cuestión motivó la queja nº 201600265.

Sin embargo, el motivo principal de la presente queja es que, a pesar de haber transcurrido más de 9 meses de la entrada en vigor del Grado 1, la Conselleria continúa sin haber aprobado la resolución oportuna de PIA en la que se le reconozcan las prestaciones o recursos que le pudieran corresponder y que no se han hecho efectivos.

Tras solicitarle el informe oportuno con fechas 05/10/2015, 06/11/2015, 24/11/2015 y 16/12/2015, la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas nos da traslado de un informe de fecha 12/11/2015, con fecha de registro de entrada en esta institución de 23/12/2015 y en relación a la persona dependiente nos indica lo siguiente:

Que según consta en el expediente a nombre de **D^a (...)**, con fecha 28 de abril de 2010 presentó una solicitud de reconocimiento de situación de dependencia, tras una revisión, por resolución de fecha 24 de febrero de 2015 se le confirmó el grado 1 de dependencia que ya tenía reconocido pero, a fecha de emisión de este informe, aún no se ha emitido la correspondiente resolución del Programa Individual de atención que debe concederle un servicio o prestación para atender su situación de dependencia.

La autenticidad de este documento electrónico puede ser comprobada en https://seu.elsindic.com		
Código de validación: *****	Fecha de registro: 27/04/2016	Página: 1
C/. Pascual Blasco, 1 03001 ALACANT Tels. 900 21 09 70 / 965 93 75 00 Fax 965 93 75 54 www.elsindic.com Correo electrónico: consultas_sindic@gva.es		

Con fecha 12/01/2016 se solicitó nuevo informe a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas en la línea de mayor concreción sobre la tramitación del expediente de la persona dependiente.

Tras otros requerimientos realizados el 12/02/2016, el 01/03/2016 y el 21/03/2016, el 30/03/2016 tuvo entrada en esta institución el nuevo informe solicitado a la Conselleria, en el que nos indicaba lo siguiente:

Que según consta en el expediente a nombre de (...), con fecha 8 de mayo de 2015 presentó revisión del reconocimiento de su situación de dependencia pero a fecha de emisión de este informe, esta persona aún no ha sido valorada.

Lamento esta espera y los inconvenientes que la misma hayan generado a la persona que formula la queja, que seguro son muchos.

La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas tiene como objetivo prioritario atender en el plazo más breve posible todas las solicitudes de dependencia. Por ello el nuevo equipo está trabajando para agilizar la entrada de las personas en situación de dependencia en el Sistema de Protección. Queremos cambiar el actual procedimiento de acceso al Sistema así como simplificar los trámites y procedimientos de evaluación con más medios humanos, técnicos y económicos.

En este sentido, los presupuestos de 2016 contemplan un incremento del 25,33% para financiar los costos del personal adscrito a los servicios municipales de atención a la dependencia para que las entidades locales puedan contratar al personal necesario. Por otra parte, la línea de Prestaciones Económicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia contará con un incremento del 30,21% que permitirá llegar a más personas.

Con fecha 06/04/2016 dimos traslado del citado informe a la persona promotora de la queja, la cual nos confirma que, hasta la fecha, no se ha resuelto el expediente de su madre, ni se ha aprobado PIA por el Grado 1 ni se ha realizado la nueva valoración solicitada.

Hemos de apreciar que si bien el informe inicial, de fecha 12/11/2015, sí se refería a la falta de resolución del expediente de la persona dependiente en grado 1, en este segundo informe se obvia esta cuestión, que es la que motiva la presente queja, y se refiere únicamente a la falta de respuesta a la solicitud de revisión del grado de dependencia, que es el motivo de otra queja planteada ante esta institución.

Llegados a este punto y tras la detenida lectura del escrito inicial de queja y de los informes remitidos por la administración, procedemos a resolver la presente queja con los datos obrantes en el expediente.

Pudiendo no ser la actuación descrita lo suficientemente respetuosa con los derechos de la promotora de la queja, en nombre de la persona dependiente, le ruego que considere los argumentos que, como fundamento de las recomendaciones con las que concluimos, a continuación le expongo.

La persona dependiente lo es desde 2010, hace seis años, pero lo es en Grado 1 nivel 2, por lo que su derecho debía hacerse efectivo, en relación a posibles prestaciones o recursos, desde el 1 de julio de 2015, y han transcurrido más de 9 meses sin que se haya resuelto su expediente.

Por lo que respecta al plazo de tramitación de los expedientes habrá que estar a lo establecido por el Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo, que modifica en su art. 5, con efectos de 1 de junio de 2010, la disposición final primera de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.

El art. 5.2 del citado Real Decreto Ley modifica los apartados 2 y 3 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, que quedan redactados como sigue:

2. En el marco de lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el plazo máximo, entre la fecha de entrada de la solicitud y la de resolución de reconocimiento de la prestación de dependencia será de seis meses, independientemente de que la administración competente haya establecido un procedimiento diferenciado para el reconocimiento de la situación de dependencia y el de prestaciones.

3. El reconocimiento del derecho contenido en las resoluciones de las administraciones públicas competentes generará el derecho de acceso a las prestaciones correspondientes, previstas en los artículos 17 a 25 de esta Ley, a partir de la fecha de resolución en la que se reconozca la concreta prestación o prestaciones que corresponden a la persona beneficiaria.

Si, una vez transcurrido el plazo máximo de seis meses desde la solicitud, no se hubiera notificado resolución expresa de reconocimiento de prestación, el derecho de acceso a la prestación económica que, en su caso, fuera reconocida se generará desde el día siguiente al del cumplimiento del plazo máximo indicado.

El art. 11 del Decreto 18/2011, de 25 de febrero del Consell, establece:

Artículo 11.4 La resolución PIA deberá dictarse y notificarse en el plazo máximo de seis meses desde la fecha de registro de entrada de la solicitud de reconocimiento de la situación de dependencia en el registro del órgano competente para su tramitación y resolución.

Artículo 11.6 Si transcurrido el plazo indicado en el apartado 4 no se hubiera resuelto en cuanto al servicio o prestación, el derecho se generará desde el día siguiente al del cumplimiento del plazo máximo de seis meses indicado para resolver.

La disposición transitoria segunda del Decreto 18/2011, de 25 de febrero, del Consell, establece:

Segunda. Retroactividad

En cuanto a los efectos de los servicios y prestaciones económicas de la dependencia, lo dispuesto en el art. 11.6 del presente Decreto será de aplicación en los términos de la disposición transitoria tercera del Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo.

Debe indicarse que la suspensión o ampliación del plazo para resolver el procedimiento conlleva que, por parte de la Conselleria de Igualdad y políticas Inclusivas, se hubiese emitido Resolución de Acuerdo de cualquiera de las dos medidas, en el que se exponga motivación clara de las circunstancias concurrentes que debería haber sido notificado, en todo caso, a los interesados (art. 42.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

La autenticidad de este documento electrónico puede ser comprobada en <https://seu.elsindic.com>

Código de validación: *****

Fecha de registro: 27/04/2016

Página: 3

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el procedimiento Administrativo común).

En el caso que nos ocupa, la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas no ha informado de la concurrencia de causa alguna, de las legalmente reguladas, que pudiera justificar la demora en la resolución del expediente. Por todo ello cabría achacar la demora a la pasividad o inacción de los órganos encargados en la tramitación del expediente.

Además, a tenor de lo señalado en diversas sentencias de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de la Comunidad Valenciana, y en concreto la Sentencia 345/14, en su tercer fundamento de derecho:

(...) no puede desconocerse que la prolongada, defectuosa y morosa tramitación del procedimiento encaminado a la determinación de los servicios y prestaciones a que hubiera tenido derecho la persona reconocida como dependiente, genera derecho a indemnización -con base legal- (...) y en el bien entendido que dicho derecho nace y deriva de la responsabilidad patrimonial de la Administración por deficiente y anormal funcionamiento del servicio público.

Así mismo, en su cuarto fundamento de derecho, se señala que:

en los casos (...) en que la resolución en plazo o al menos dentro de unos márgenes de demora razonable, deviene esencial por la naturaleza de la situación de base (hechos determinantes), la demora constituye un funcionamiento anormal de la Administración, que da derecho al resarcimiento de daños y perjuicios, en los términos también previstos por el Ordenamiento.

Al respecto de la manifiesta demora en la resolución objeto de la presente queja, el Tribunal explicita

(...) Y ello sin que aparezca evidenciado que la dicha demora fue debida a causa justificada y razonable, sino exclusivamente, a la falta de impulso del órgano administrativo y funcionario responsable de la tramitación.

Por último, en la Sentencia señalada se apunta que:

(...) No en vano la normativa sobre dependencia (...) destaca como objetivos fundamentales los de promoción de la autonomía personal de las personas cuyas deficiencias y/o padecimientos físicos y/o psicológicos -de envergadura, a lo que se une muchas veces la elevada edad del interesado- les hacen acreedoras de “ayuda” institucional en orden al desarrollo de una vida digna, de ahí que el “tiempo” que la Administración ha de emplear para determinar la medidas necesarias en orden a atender las necesidades de dichas personas, con dificultades para la realización de las actividades básicas de la vida diaria, ha de ser indispensable y necesario (...).

Parece evidente que cuando han transcurrido ya no seis meses sino años de la aprobación de la resolución que acredita un grado de dependencia, una interpretación justa de la norma ha de estimar que desde el mismo día que el grado reconocido entra en vigor la persona dependiente es acreedora de derechos a las prestaciones y recursos que le correspondan por dicho grado, por lo que cabría esperar la máxima diligencia en la administración y que se remitiese a las personas afectadas ese mismo día, si no antes, la propuesta PIA para que desde el 1 de julio de 2015 todas las personas dependientes de grado 1 viesen hechos efectivos sus derechos, sin más demoras.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29.1 y 29.2 de la Ley de la Generalitat Valenciana 11/1998, de 26 de diciembre, reguladora del Síndic de Greuges, formulamos a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas una **ADVERTENCIA** dirigida a que los informes remitidos por dicha administración contengan, expresamente, datos actualizados del expediente solicitado y acerca de la cuestión planteada.

Del mismo modo, formulamos a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas las siguientes **RECOMENDACIONES**:

RECOMENDAMOS que teniendo reconocida la persona dependiente un Grado 1 nivel 2 desde noviembre de 2010, se proceda de manera urgente a reconocer y otorgar las prestaciones que, de acuerdo con la valoración y el programa individual de atención, correspondan.

RECOMENDAMOS el reconocimiento del derecho a la percepción de los efectos retroactivos de la prestación que correspondan, en su caso, a la persona dependiente, debiendo computarse los mismos desde el mismo día de la entrada en vigor del Grado 1 en el calendario del sistema de la dependencia, el 1 de julio de 2015, pues nada justifica que tras más de 5 años sufriendo ese grado de dependencia no se hiciesen efectivos sus derechos el mismo día de entrada en vigor del grado que le afecta.

RECOMENDAMOS consigne las dotaciones presupuestarias necesarias para hacer efectivo el derecho a la percepción de las prestaciones por dependencia en el plazo legalmente establecido, dando prioridad a las mismas dado su consideración de derecho subjetivo perfecto.

Creemos necesario **RECORDAR** a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, la **obligación legal de resolver en plazo, dado que el no cumplimiento de tal obligación** aumenta la **incertidumbre** que se deriva de la **falta de resolución** y amplía aún más, si cabe, el **sufrimiento soportado por las personas dependientes y sus familias**, en un momento de dificultades económicas como es el actual. No debe olvidarse, además, la situación de **indefensión jurídica** que se genera al ciudadano con el incumplimiento de los plazos legalmente establecidos, sobre todo ante los casos de **silencio administrativo**, como es el que nos ocupa.

Le agradecemos que nos remita, en el plazo de un mes, el preceptivo informe en el que nos manifieste la aceptación o no de las recomendaciones y del recordatorio que le realizamos o, en su caso, las razones que estime para no aceptarlos.

Para su conocimiento, le hacemos saber, igualmente, que a partir de la semana siguiente a la fecha en la que se ha dictado la presente resolución, ésta se insertará en la página web de la institución.

Atentamente,

José Cholbi Diego
Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana

La autenticidad de este documento electrónico puede ser comprobada en <https://seu.elsindic.com>

Código de validación: *****

Fecha de registro: 27/04/2016

Página: 5